

BAJO EMBARGO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE A LAS 0:01 GMT//19 DE NOVIEMBRE A LAS 01:01 CET//18 DE NOVIEMBRE A LAS 19:01 EST//18 DE NOVIEMBRE A LAS 21:01 BRT

Para más información, por favor, comuníquese con:
Susan Tonassi (stonassi@burness.com o +49 160 9327 9327 en Berlín)
Florence Wood (fwood@burness.com o +44 7491 147 576 en Lisboa)

El nuevo camino hacia la deforestación: El aumento de la minería y los megaproyectos emerge como una alarmante amenaza hacia los ya castigados bosques tropicales y la biodiversidad

Compañías, gobiernos e inversores están impulsando proyectos mineros y de infraestructura, y sentando las bases para un desarrollo rápido y no sostenible que dañará los bosques, la vida silvestre y a las personas, con lo cual se aviva el conflicto

Washington, DC//Berlín, Alemania (19 de noviembre de 2020). Un nuevo informe que evalúa el progreso de los esfuerzos internacionales para poner fin a la pérdida de bosques en el mundo ofrece el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre el gran papel que la infraestructura y la minería tienen en la deforestación tropical, ahora y en el futuro. El informe descubre que un aumento en los megaproyectos —proyectos de desarrollo grandes y complejos que pueden combinar transporte, energía y otras infraestructuras— planeados para los bosques tropicales se encaminan a destruir bosques y abrir las áreas forestales remotas a aún más desarrollo. En particular, esta nueva infraestructura está encaminada a aumentar la actividad minera en los bosques remotos de la Amazonía, el Sudeste Asiático y África.

«Los bosques, los pueblos forestales y la vida silvestre, ya en un punto de quiebre, están cada vez más en la mira de grandes desarrollos de infraestructura y minería —dijo Franziska Haupt, Directora ejecutiva de Climate Focus en Berlín y autora principal de un nuevo informe de los Socios de la Evaluación de la Declaración de los Bosques de Nueva York *Progreso en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques: Lograr un equilibrio entre los bosques y el desarrollo. Abordar la infraestructura y las industrias extractivas, promover medios de vida sostenibles*—. Los nuevos grandes proyectos que están en desarrollo o en planificación en la Amazonía, Indonesia, Mesoamérica, la Cuenca del Congo y en otras partes revelan que nuestro insaciable apetito de carbón, minerales, metales, energía y productos agrícolas como la soja han abierto un nuevo frente de batalla para la protección de los bosques del mundo.

Algunos gobiernos se están sumando a la amenaza y están replegando las protecciones forestales, mientras sus países se esfuerzan por hacer frente a la crisis económica causada por la Covid-19».

Publicado seis años después del lanzamiento de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, una promesa de reducir a la mitad la deforestación para 2020 y ponerle fin para 2030, el informe revela que no se ha alcanzado la meta de reducción del 2020 y que, para cumplir la meta de eliminación del 2030, se necesitará una reducción sin precedentes en la tasa de pérdida forestal anual.

Además, el estudio es el primero de su clase en describir completamente toda la tendencia pantropical que muestra a compañías, gobiernos, inversores y otros actores que, a puertas cerradas, dan luz verde a dañinos proyectos mineros y de infraestructura y a la vez que no tienen en cuenta el valor climático, económico, social y ambiental de los bosques a través de políticas efectivas de bosques y biodiversidad. El informe también observa el papel que la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen para contrarrestar estas tendencias.

«Si se tuviera en cuenta el valor de los bosques —su rol en la reducción del cambio climático, la protección de hábitats animales y la reducción de la propagación de zoonosis, en mantener limpias las fuentes de agua, la provisión de oportunidades económicas y una larga lista de beneficios que no tienen precio—, entonces, muchos de estos proyectos nunca obtendrían la luz verde», dijo Erin D. Matson, consultora senior en Climate Focus y coautora y coordinadora del informe.

En elaboración

En las regiones tropicales más críticas que quedan, que incluyen América del Sur, el África subsahariana, Borneo, Papúa y el Mekong, hay planeados o en desarrollo megaproyectos de corredores económicos —que unen carreteras, ríos navegables y vías férreas con extracción de recursos naturales— y grandes diques.

- A lo largo de los cinco países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador), los gobiernos están invirtiendo un total de veintisiete mil millones de dólares en planes quinquenales para la construcción o la renovación de más de doce mil kilómetros de carreteras. Si se realizan todos los proyectos planeados, esto provocará la deforestación de aproximadamente 2,4 millones de hectáreas en los próximos veinte años.
- En Indonesia, la autopista transpapuana —una red de cuatro mil kilómetros— atravesará el Parque Nacional Lorentz, con lo que aumentará el acceso a cincuenta mil hectáreas de concesiones mineras dentro del parque.

- Una línea férrea planeada para Kalimantan, Indonesia, abriría áreas a la minería de carbón y la producción de aceite de palma. En la vecina Papúa Nueva Guinea, dos planes actualmente en proceso duplicarían la longitud de la red de carreteras del país hacia fines del 2022.
- En el África subsahariana, hay un boom de infraestructura organizado en torno a decenas de corredores internacionales de desarrollo para extraer, transportar y exportar minerales y energía. Estos corredores que abarcan diversas naciones atravesarían 400 y degradarían 1.800 áreas protegidas.

«El estudio adecuado del impacto que los grandes proyectos de infraestructura tienen sobre los bosques (Análisis de Impacto Forestal) sigue siendo un gran desafío —dijo Arild Angelsen, asociado senior en el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y profesor de economía en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU), que colaboró en el informe—. La abrumadora importancia de la nueva infraestructura, del mapa carretero en particular, para evaluar adecuadamente el destino de los bosques debería hacer que esta sea una prioridad máxima en materia de políticas públicas».

En los trópicos también hay proyectos mineros, siendo la minería de carbón la más dañina. Los estudios han mostrado que la deforestación realizada para la minería de carbón es particularmente nociva porque da un «revés doble» de emisiones: arrasa con los bosques y produce y quema carbón, que libera carbono. Además, el informe señala que la minería es el sector económico más violento del mundo, con el número más alto —21%— de conflictos ambientales denunciados en el Atlas de Justicia Ambiental y la mayoría de los asesinatos de ambientalistas —cincuenta en 2019.

Un sondeo de las mineras que se realizó específicamente para el estudio revela que la acción de la industria en materia de biodiversidad está rezagada. Hay solo un puñado de compañías mineras que informaron que tienen políticas de biodiversidad robustas y hay aún menos evidencia de que estas políticas se pongan en práctica.

«Los bosques están en un punto de inflexión peligroso y estos nuevos proyectos de infraestructura a gran escala y desarrollos extractivos podrían empujarnos al borde del abismo y socavar los esfuerzos internacionales para detener la deforestación. Hay una ventana de oportunidad pequeña (y se está cerrando) para repensar y reorientar estos proyectos hacia una dirección más sostenible. Los gobiernos, las empresas y los inversores necesitan dar un paso adelante y comprometerse a tener más transparencia y a actuar rápidamente para evitar más daño a las personas, la vida silvestre y la naturaleza», dijo Matson.

Caminos hacia la deforestación

El informe revela que un aumento desenfrenado en las redes de transporte está por hacer el mayor daño a los bosques. Existen estudios que muestran que estos caminos y estas redes hacen que el acceso a los bosques sea más fácil para los leñadores, agricultores y otros responsables de la tala legal e ilegal. En este momento, las carreteras son responsables de entre el 9 y el 17% de la deforestación tropical y subtropical, y la mayor parte de la nueva deforestación ocurre en un radio de un kilómetro de cualquier carretera.

«Las personas necesitan mejores accesos, pero estas no son autopistas diseñadas para priorizar la conexión de las comunidades con la atención sanitaria, otros servicios esenciales u oportunidades económicas. Al contrario, su propósito es facilitar el movimiento de mercancías y hacer que extraer el capital natural sea más fácil y barato y se haga de una forma que beneficie sobre todo a las élites económicas. Mientras tanto, desatan una caja de Pandora de potencial daño forestal que hiere a los pueblos locales y a la biodiversidad —Anthony Bebbington, coautor del informe y líder en investigaciones sobre industrias extractivas e infraestructura—. Estos proyectos viales son, a su vez, parte de una red más amplia de rutas fluviales, puertos y centros logísticos que aumentan drásticamente la probabilidad de futura deforestación al hacer que las áreas otrora remotas sean accesibles para la inversión».

En Papúa Indonesia y la Cuenca del Congo, las redes viales han aumentado un 40% desde inicios de la década del 2000. Estas carreteras e infraestructuras suelen conducir a actividades ilegales o no controladas que pueden tener impactos significativamente altos sobre los bosques. En Brasil se estima que, por cada kilómetro de carreteras legales, hay tres kilómetros de carreteras ilegales.⁸ Esto también conduce a un mayor contacto entre los humanos y los animales salvajes, que es un importante factor que contribuye a la propagación de nuevas enfermedades zoonóticas como la Covid-19.

Compromisos hacia ningún lugar

El informe incluye el primer sondeo realizado por CDP, un socio de la Evaluación de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, del estado de los compromisos corporativos en materia de biodiversidad de las compañías metalíferas, mineras y carboníferas que operan en áreas forestales. Solo veintitrés empresas de las casi 225 invitadas respondieron la encuesta. CDP analizó veintidós compañías más para proporcionar un análisis de cuarenta y cinco empresas clave que operan en regiones tropicales.

«Hay algunas señales de progreso (más de tres cuartos de las compañías evaluadas han asumido un compromiso relacionado con la biodiversidad)», dijo Morgan Gillespy, directora global de bosques de CDP, la organización sin fines de lucro que fue la punta

de lanza de las revelaciones relacionadas con los bosques de las empresas metalíferas y mineras. La mayoría de las compañías relevadas también indicaron que la biodiversidad o el ambiente se tuvieron en cuenta en los más altos niveles (el directorio o la gerencia administrativa).

«Pero hace falta más. Solo un tercio de las compañías dio a conocer detalles de sus proyectos de compensación de la biodiversidad, y pocas compartieron metas de acción claras y específicas. Las compañías extractivas, así como también los gobiernos, deben esforzarse más y mejorar la transparencia e implementar planes de gestión que protejan los bosques».

El informe respalda hallazgos de otros estudios recientes que se señalan que los compromisos corporativos de alto nivel entre las mineras no siempre se han traducido en acción al nivel del proyecto. De hecho, varios de los compromisos más fuertes tuvieron como contrapartida prácticas pobres en el territorio. Un análisis que el Banco Mundial realizó en 2019 sobre veintinueve casos de estudio de mineras a larga escala en bosques no pudo encontrar ni un solo ejemplo de una operación minera que abordara en forma integral y mitigara los riesgos forestales.

«Esto constituye un recordatorio saludable de que vivimos en una fantasía de promesas y en una realidad de poco avance, falta de transparencia, intereses creados y cortoplacismo —sostuvo Robert Nasi, director general de CIFOR—. Lamentablemente, la realidad siempre nos pasa factura».

Las barreras que hay para avanzar en el alineamiento de los proyectos mineros y de infraestructura con la protección forestal incluyen el desequilibrio de poder entre, por un lado, los gobiernos y las compañías que priorizan la destrucción por sobre la protección de los bosques y, por el otro, los pueblos indígenas y las comunidades locales que ansían mantener los bosques en su lugar. Las barreras en el nivel gubernamental incluyen dificultades en la implementación de políticas forestales existentes, debido a la falta de voluntad política, capacidad y estabilidad (y el poderoso influjo de los actores industriales). En el nivel corporativo, hay una falta de verificación independiente de los datos que las empresas informan sobre el progreso, la falta de definiciones y normas comunes en la minería y la limitada incorporación de las comunidades locales en el monitoreo.

«Aún más fundamental es la ausencia de procesos de consulta significativos para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y locales que se ven afectados y que tienen un papel crucial como administradores de los bosques. Juntas, estas barreras constituyen obstáculos profundos que imposibilitan la rendición de cuentas y la transparencia» dijo Bebbington.

El informe también proporciona los resultados del relevamiento que CDP hizo de doscientos gobiernos estatales y regionales sobre en qué medida la minería conduce a la deforestación en sus jurisdicciones y sus respuestas ante esta destrucción. Cerca de veintiún representantes de estados forestales subnacionales de América Latina y el Sudeste Asiático afirmaron que la minería y la infraestructura son una causa de deforestación en sus regiones y han adoptado políticas para regular esta actividad. Pero pocos han traducido estas políticas en planes concretos de gestión forestal o han evaluado en forma sistemática sus riesgos forestales.

«Las soluciones a la deforestación impulsada por las industrias extractivas y la infraestructura están disponibles, pero aún no están siendo implementadas a escala —afirmó Alison Hoare, investigadora senior en Chatham House y coautora del estudio—. Esto seguirá siendo así a menos que todos los impactos ambientales de estos sectores se integren en la toma de decisiones de inversores y consumidores. A su vez, esto abriría el espacio para que los gobiernos consulten con actores nacionales y consideren en modo adecuado todas las opciones para el uso de la tierra».

Repliegues y el camino hacia adelante

Sumado a esto, algunos gobiernos locales y nacionales han realizado una serie de pasos atrás, en ciertos casos usando la Covid-19 como justificación. A lo largo de la Amazonía, comunidades indígenas han sido víctimas de violencia y amenazas reiteradas, y hasta la muerte de líderes indígenas, por parte de mineros informales de escala pequeña. Las decisiones del gobierno brasileño de abrir el territorio indígena a la minería industrial y de legalizar la minería de escala pequeña en las tierras indígenas amenazan aún más a estas comunidades. En Indonesia, una ley de mayo de 2020 dio a las compañías mineras mayores libertades, facilitando el camino para abrir nuevos territorios mineros y aumentar la actividad exploratoria.

A partir de todos estos datos, el informe establece cuatro estrategias complementarias para reducir la amenaza que la infraestructura y la minería representan para los bosques. Incluyen: Adoptar caminos alternativos para el desarrollo que reduzcan la sobreexplotación, la producción ineficiente y el consumo excesivo de recursos; alinear el planeamiento macroeconómico y estratégico con las metas de protección forestal; hacer una evaluación completa de los potenciales impactos negativos de los proyectos mineros y de nueva infraestructura e idear estrategias para minimizarlos; y, finalmente, reconocer a las comunidades locales y crear formas para promover los medios de vida sostenibles y atacar la deforestación.

«Vemos que en las naciones forestales se ponen en juego tendencias que están alimentadas por decisiones en los niveles más altos. Al abrir camino a otros factores impulsores de la deforestación, la infraestructura y la minería en conjunto plantean tal

vez la amenaza más grande a los bosques y la biodiversidad —afirmó Haupt—. Pero con estas cuatro estrategias, vemos un camino hacia adelante que puede concretar todos los beneficios sociales, económicos y ambientales del desarrollo».

###